

ORDEN de 26 de febrero de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 12.678, promovido por «Laboratorios Ferrer, S. L.», contra resolución de este Ministerio de 27 de junio de 1963.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 12.678, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Laboratorios Ferrer, S. L.», contra resolución de este Ministerio de 27 de junio de 1963, se ha dictado con fecha 14 de diciembre último sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la representación de «Laboratorios Ferrer, S. L.», debemos declarar como declaramos ajustada a Derecho, y, por ende, confirmamos las resoluciones del Ministerio de Industria de quince de febrero de mil novecientos sesenta y tres y la denegatoria del recurso de reposición de veintisiete de junio del mismo año, a virtud de las cuales se declaró no haber lugar a la inscripción en el Registro de la Propiedad Industria de la marca «Napason», número trescientos setenta y dos mil setecientos veinte, solicitada por expresada entidad recurrente para distinguir «productos químicos para la medicina y la farmacia, preparaciones y especialidades farmacéuticas, medicamentos de veterinaria, sueros, vacunas y desinfectantes»; sin hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 26 de febrero de 1966.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 26 de febrero de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 12.763, promovido por «Davur, Sociedad Anónima», contra resolución de este Ministerio de 8 de julio de 1963.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 12.763, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Davur, Sociedad Anónima», contra resolución de este Ministerio de 8 de julio de 1963, se ha dictado con fecha 18 de diciembre de 1965 sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de «Davur, S. A.», contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de ocho de julio de mil novecientos sesenta y tres, denegatorio de la marca número trescientos noventa y un mil quinientos treinta y ocho, denominada «Nuclear», debemos declarar y declaramos que tal resolución es conforme a derecho, y por lo mismo válida y subsistente; sin hacer imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 26 de febrero de 1966.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 26 de febrero de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 12.017, promovido por «Chemofux Dr. W. Fux & Dr. G. Gergely Pharm. Fabrik» contra resolución de este Ministerio de 4 de abril de 1963.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 12.017, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Chemofux Dr. W. Fux & Dr. G. Gergely Pharm. Fabrik» contra resolución de este Ministerio de 4 de abril de 1963, se ha dictado con fecha 18 de diciembre último sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por «Chemofux Dr. W. Fux & Dr. G. Gergely Chem. Pharm. Fabrik» contra acuerdo del Ministerio de Industria de cuatro de abril de mil novecientos sesenta y tres, que dando lugar al recurso de reposición entablado el dieciséis de marzo de mil novecientos sesenta y dos anuló su primera resolución de dieciséis de febrero de mil novecientos sesenta y dos, que había otorgado la inscripción en el Registro correspondiente de la marca internacional doscientos treinta mil setenta y cinco, «Multilimo», resolución anulatoria que por no haber sido dictada conforme a derecho acordamos su invalidez, quedando firme la primera decisión de dieciséis de febrero de mil novecientos sesenta y dos antes citada; sin hacer especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 26 de febrero de 1966

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 21 de febrero de 1966 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Bernuy de Coca, provincia de Segovia.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Bernuy de Coca, provincia de Segovia, en el que no se ha formulado reclamación alguna durante su exposición al público, siendo favorables cuantos informes se emitieron, y habiéndose cumplido todos los requisitos legales de tramitación.

Vistos los artículos 1.º al 3.º, 5.º al 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944; la Ley de Concentración Parcelaria de 8 de noviembre de 1962, y la Orden ministerial comunicada de 29 de noviembre de 1956, en relación con los artículos pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Dirección General de Ganadería e informe de la Asesoría Jurídica del Departamento, ha resuelto:

Primero.—Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Bernuy de Coca, provincia de Segovia, por la que se declara existente la siguiente:

Cordel de merinas.—Anchura, 37,61 metros.

El recorrido, dirección, superficie y demás características de la vía figura en el proyecto de clasificación, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto le afecta.

Segundo.—Esta resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia, para general conocimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por ella interponer recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en la forma, requisitos y plazos señalados en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en armonía con el artículo 52 y siguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 21 de febrero de 1966.—P. D., F. Hernández Gil.

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 28 de febrero de 1966 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 12.816, interpuesto por el Ayuntamiento de Jabaloyas (Teruel).

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con fecha 22 de noviembre de 1965 sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo número 12.816, interpuesto por el Ayuntamiento de Jabaloyas (Teruel) contra Orden de este Departamento de 22 de julio de 1963, sobre deslinde de monte; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos tanto la alegación de inadmisibilidad formulada por el Abogado del Estado como el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre del Ayuntamiento de Jabaloyas (Teruel) contra la Orden del Ministerio de Agricultura de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y tres, desestimatoria del previo de reposición deducido respecto a otra de dos de octubre de mil novecientos sesenta y dos, que aprobó el deslinde del monte «El Pinar», número veintitrés del Catálogo de los de Utilidad Pública de dicha provincia y perteneciente a los propios del expresado Ayuntamiento, declarando expresamente que el acto administrativo recurrido es conforme a derecho y como tal válido y subsistente, sin especial imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1966.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 28 de febrero de 1966 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 12.728, interpuesto por don Fausto Jordana de Pozas.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, con fecha 14 de diciembre de 1965, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo número 12.728, interpuesto por don Fausto Jordana de Pozas, contra Resoluciones de este Departamento de 23 de febrero de 1960, 17 de junio de 1963 y ampliada a la de 6 de julio de 1964, sobre deslinde de montes, sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que dando lugar al recurso entablado por don Fausto Jordana de Pozas contra la Orden del Ministerio de Agricultura de diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y tres, debemos declarar y declaramos la nulidad de las actuaciones del expediente administrativo, con inclusión de la Orden recurrida, a partir del momento en que debió oírse a la Dirección General de lo Contencioso del Estado, cuyo informe habrá de recabarse, retro trayéndose para ello el expediente al mencionado momento oportuno; sin pronunciamiento especial sobre las costas de este recurso»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la precitada sentencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1966.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN de 24 de febrero de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal Supremo.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo en grado de apelación promovido por la Administración General del Estado, en concepto de apelante, contra sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid en 29 de mayo de 1964, relativa a expropiación de la parcela número 5 a la apelada doña Luisa Moreno Meléndez, para ampliación del Aeropuerto de Barajas, se ha dictado sentencia con fecha 16 de octubre de 1965, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando la apelación interpuesta por el defensor de la Administración contra la sentencia dictada por la Sala Primera de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, con fecha 29 de mayo de 1964, en el pleito a que estos autos se refieren, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia en todas sus partes por ser conforme a Derecho; sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 24 de febrero de 1966.

LACALLE

Excmo. Sr. General Subsecretario del Aire.

ORDEN de 28 de febrero de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal Supremo.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo entre don Isidoro López Pastor, Brigada de Complemento de este Ejército, en situación de retirado, como demandante, y la Administración General del Estado, como demandada, sobre impugnación de resoluciones de este Ministerio de fecha 6 de agosto de 1964, denegatoria de petición de indemnización por privación de vivienda, y la de 28 de enero de 1965, confirmatoria en reposición de aquélla, se ha dictado sentencia con fecha 4 de febrero de 1966, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo que interpuso don Isidoro López Pastor contra las resoluciones del Ministerio del Aire de 6 de agosto de 1964 y 28 de enero de 1965, mediante las que se le privó de la indemnización relacionada con el derecho a efectividad de vivienda, debemos declarar y declaramos encontrarse ambas ajustadas al ordenamiento jurídico, por lo que las confirmamos; sin especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», quedando extendida en tres hojas del papel del sello de oficio series y números siguientes: Q9732666, Q9732265 y la presente, Q9732599, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 28 de febrero de 1966.

LACALLE

Excmo. Sr. General Subsecretario del Aire.

ORDEN de 2 de marzo de 1966 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal Supremo.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo entre don Pascasio Corchero Roble, como demandante, y la Administración General del Estado, como demandada, sobre impugnación de las resoluciones de este Ministerio de 11 de julio de 1964 y 28 de enero de 1965, que desestimaron la petición formulada por el recurrente en relación con la concesión de indemnización por privación de vivienda, se ha dictado sentencia con fecha 9 de febrero de 1966, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pascasio Corchero Robles, Teniente de la Escala de Complemento del Arma de Aviación, Servicio de Tierra, contra las resoluciones del Ministerio del Aire de 11 de julio de 1964 y 28 de enero de 1965, que desestimaron la petición del interesado de que le fuese reconocida la indemnización por privación del derecho de efectividad de vivienda militar, resoluciones que declaramos conforme a Derecho, firmes y subsistentes, absolviendo a la Administración de la demanda y sus pretensiones; sin hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»